

Id Cendoj: 35016340012001100715
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 1
Nº de Recurso: 1263/1999
Nº de Resolución: 784/2001
Procedimiento: SOCIAL
Ponente: HUMBERTO GUADALUPE HERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIB. SUPERIOR JUSTICIA SALA SOCIAL

LAS PALMAS

SENTENCIA: 00784/2001

ROLLO Nº RSU 1263 /1999

40125

(mcm)

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

En LAS PALMAS a veintisiete de Septiembre de dos mil uno.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Ilmos. Sres. D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ Presidente, DÑA. MARIA JESUS GARCIA HERNÁNDEZ Y D. RAFAEL A. LOPEZ PARADA Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por INSS contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL N. 6 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11.11.98, dictada en los autos de juicio nº 683/96 en proceso sobre PRESTACIONES, y entablado por DNA. Sara contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 1º).- Que Dº Sara , nacida en fecha 18 de marzo de 1940 con D.N.I. nº NUM000 , esta encuadrado en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social con el nº de afiliación NUM001 . 2º).- Que la actora venía trabajando habitualmente ejerciendo funciones de agricultora causando baja por incapacidad laboral transitoria en fecha 3 de octubre de 1994. 3º).- Que en fecha 26 de junio de 1996, la Comisión de Evaluación de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, visto el Dictamen emitido por la unidad de Valoración Médica de Incapacidades determina el siguiente cuadro residual: Tensión arterial. Neurosis de ansiedad. Artrosis cervical y gonartrosis grado II. Hiperplasia folicular coloide de tiroides. Antigua fractura de colles izquierda. Dolor a la movilidad de muñeca izqda. limitación importante de la movilidad de muñeca I, pero subjetivo. 4º).- Que en fecha 2 de julio de 1996, dícese, registro de salida, la entidad gestora comunica a la actora,

resolución por la que se procede a denegar prestación de invalidez por no alcanzar, las lesiones que padece, un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, para ser constitutivas de una invalidez permanente, según lo dispuesto en los artículos 134 y 137 de la L.G.S.S., aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio (BOE 26/06/94), en relación con los artículos 19,27.1 y 31 del texto refundido de la Ley del Régimen Especial Agrario, aprobado por Decreto 2123/1971, de 23 de julio (BOE 21/09/71). 5°).- Que la actora de 58 años de edad y agricultora de profesión, además de las señaladas por la EVI padece: Cervicoartrosis moderada- severa (grado III) (radiología 21/10/98)- Que ya se señalaba en el informe médico de síntesis del EVI el 22/06/96, afectando C4, C5, C6, C7, con mayor afectación C5, C5, C7. Osteofitosis interior C5 y C6 con obliteración del agujero de conjunción, y que le causa dolor cervical, produciendo la contractura muscular antiálgica limitación a la movilidad del cuello a la vez que desencadena el síndrome cérvico cefálico caracterizado por cefaleas, náuseas, mareos, sensación vertiginosa y trastornos visuales esporádicos por la compresión de los vasos sanguíneos cervicales posteriores relacionados con la osteofitosis y con la posición del cuello, viéndose agravado con actividad física y posturas forzadas, con pérdida de fuerza en extremidades superiores.- Espondiloartrosis lumbar moderada (grado II-III) (radiografía 21/10/98).- Afectando principalmente a L3, L4 y L5 con osteofitosis anterior, posterior, laterales y reducción del espacio intervertebral L5-S1, proceso degenerativo artrosico avanzado que se verá agravado por esfuerzo y estrés físico incrementándola contractura muscular y limitaciones a la movilidad Test Lassegue negativo fuerza conservada extremidades inferiores.- Síndrome femoro pastelar bilateral (expd. Clínico 22/10/98)- Inflamación residual ambas rodillas con dolor a la genuflexión, crepitación retropatelar bilateral dolorosa (signo del cipillo rotuliano bilateral), sin inestabilidades ligamentosas y maniobras meniscales negativas.- Síndrome de fibromalgia.- Cuadro doloroso generalizado sin signos de sinovitis ni de otros trastornos orgánicos evolución crónica y acompañado de fatiga y trastorno del sueño, puntos dolorosos a la presión en áreas definidas. 6°).- Que la base reguladora del actor es de 61.417 pts mensuales.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: "Que estimando parcialmente la demanda promovida por D^a. Sara , contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar a la actora afecta a una situación de invalidez permanente en el grado de total cualificada para su profesión habitual de agricultora, derivada de enfermedad común, por lo que debo condenar al I.N.S.S. a estar y pasar por esta declaración y al abono en consecuencia de una pensión equivalente al 75% de su base reguladora mensual de 61.417 pesetas, con fecha de inicio el 26 de junio de 1996".

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda de la actora, afiliada al Régimen Especial Agrario, peona agrícola, y declara a la misma en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, por padecer cervicoartrosis moderada-severa, espondiloartrosis lumbar, moderada, síndrome femoro patelar bilateral, síndrome de **fibromialgia** , HTA, neurosis de ansiedad, antigua fractura de collex izquierda, dolor a la movilidad de la muñeca izquierda, limitación importante de la movilidad de muñeca izquierda, pero subjetivo.

Contra la misma se alza la parte recurrente, formulando el presente recurso de suplicación, con base en un motivo de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica.

Así, en primer lugar y con amparo en el artículo 191 letra b) de la Ley de Procedimiento Laboral pretende la sustitución del hecho probado quinto por el siguiente texto:

"...La actora con carácter previo a la solicitud de invalidez, estuvo en situación de baja médica por I.T. desde el 3.10.94 hasta el 01-03-96 en que la Inspección del Servicio Canario de Salud le da el alta. Dicha alta fue impugnada por la actora en los autos 697/96 que recayeron en el Juzgado de lo Social nº 1.

En el momento 26-06-96, es decir con posterioridad al alta, la actora padecía IHT, neurosis de ansiedad, artrosis cervical y gonartrosis grado II, hiperplasia folicular coloide de tiroides, antigua fractura de cóllex izquierda, dolor a la movilidad de la muñeca, limitación importante de la muñeca izquierda, pero subjetiva, es decir, el mismo contenido que el informe de la UVMI de 17.06.96, folio 19.

En fecha 11.03.97 para los autos 697/96 del Juzgado de lo Social nº 1 se emite informe por el médico forense que fue ratificado en acto de juicio, y según el cual la actora presentaba HTA, ligera artrosis múltiple, síndrome ansioso depresivo e hipertiroidismo, y en lo que interesaba al pronóstico de vida laboral, que se consideraba que en aquel momento se podía conseguir que la paciente se adaptara a la vida laboral

dentro de la normalidad.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en los autos 697/96 desestimó la impugnación de alta de la actora..."

Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el Juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1990) "sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del Juzgador... »); que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del Fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

A la vista de lo expuesto el motivo ha de decaer, pues la parte lo que pretende es sustituir la valoración de la prueba que hace la Juez "a quo" por la suya propia.

La Juzgadora ante las pruebas que se le aportaron acogió y valoró decisivamente la pericial practicada en el acto del juicio, y si bien es cierto que se aportó por el INSS un informe forense practicado en un procedimiento de I.T., después de oír al perito de parte optó por su testimonio, los que excluye toda idea de error evidente en la valoración de la prueba; sino que lo que existe es la opción por una de ellas, debiendo en todo caso destacarse que la principal diferencia esta en el grado del proceso artrósico, que el forense considera ligero, y el perito moderado-severo, si bien el resultado del empeoramiento clínico es coincidente en ambos informes.

Pretende, además, la recurrente la introducción de un hecho probado nuevo del siguiente tenor literal: "...Que la actora de 58 años de edad padece HTA, neurosis de ansiedad, artrosis cervical y gonartrosis grado II, hiporritoidismo, antigua fractura de collex izquierda, limitación dolorosa a últimos grados a nivel cervical, limitación dolorosa a últimos grados de la columna dorso lumbar, ligera osteoporosis, ligera espondiloartrosis cervical, y ligera discoartrosis a nivel lumbar..."; motivo que igualmente ha de desestimarse, pues se apoya en la revisión anterior que no ha prosperado y pretende, además, sustituir la valoración del Juez "a quo", amparada en la pericial médica, por la del INSS amparada en el documento o informe del forense, que le es favorable, olvidando que es al Juez "a quo" a quien corresponde valorar la prueba. No existe, pues, error en la valoración, sino opción por una pericial lo que impide el éxito del motivo revisorio.

SEGUNDO.- Con amparo en el artículo 191 letra c) de la Ley de Procedimiento Laboral alega la parte infracción del artículo 134 en relación con el 137.4 de la Ley General de la Seguridad Social, articulando tres submotivos que se concretan en los siguientes:

a) La actora que estaba en situación de Incapacidad Temporal dada de alta y dicha alta declarada válida por el Juzgado de lo Social, es decir, no existía situación de Incapacidad Transitoria.

El Juez "a quo" no ha valorado el informe forense y

c) El informe de parte es posterior al momento en que el demandante pasa por la UVMI.

Por lo que respecta al primer argumento lo que la parte parece sostener, de modo impreciso, es que la baja médica había sido dejada sin efecto, y no es posible declarar en situación de invalidez permanente a quien ya había sido dado de alta.

Tal cuestión la ha resuelto la Sala en Sentencia de fecha 28.4.2000 Recurso nº 762/98 Sentencia nº 330/2000, en la que afirma:

"... La cuestión, pues, objeto de debate es el derecho a percibir prestaciones de invalidez permanente sin haber cursado previamente período de incapacidad temporal, y al respecto hay que tener en cuenta que con anterioridad a la modificación introducida por el art. 34 de la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre (RCL 1994, 3564) de Medidas Fiscales, administrativas y de orden social que modifica el art. 134.2 del TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, mantenía en su apartado 5 del art. 132 de la LGSS de 1.994 (RCL 1974, 1482 y NDL 27361) lo siguiente: "La invalidez, permanente o provisional, habrá de derivarse de la situación de incapacidad laboral transitoria debida a enfermedad, común o profesional, o a accidente, sea o no de trabajo, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad laboral transitoria, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 95, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el número 2 del artículo 83 de esta Ley.

En la actualidad el art. 134.3 TRLGSS de 1994 reza el siguiente tenor literal: " La invalidez permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el art. 125, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el número 2 del artículo 114 de esta Ley, bien en los casos de acceso a la invalidez permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el número 3 del artículo 138».

Como se observa en la reforma introducida por la Ley 42/1994, la única modificación que puede apreciarse en éste párrafo (ya recogido en el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se aprobó el anterior Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), con independencia de que ha variado el número del precepto, ha sido la supresión del mismo de la situación de invalidez provisional, dado que esta ha desaparecido, y por otra parte, la nueva denominación de la situación de la incapacidad laboral)transitoria, hoy incapacidad temporal. De lo que se deriva, que no ha existido por tanto, ninguna modificación de carácter particular en lo que se refiere de una previa incapacidad laboral transitoria, hoy incapacidad temporal, al menos desde que se aprobó la Orden 15 abril 1969 (RCL 1969, 869, 1548 y NDL 27275) que establece normas de aplicación y desarrollo de las pretensiones por Invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social, en la cual se introdujo por primera vez dicho requisito.

A mayor abundamiento, aun cuando ya en la normativa anterior se venía señalando que la situación de invalidez permanente había de derivarse de la situación de ILT, es lo cierto que la propia Entidad Gestora no ha puesto obstáculo legal alguno para reconocer el derecho a la invalidez a aquellos trabajadores que no provinieran de dicha situación, y que como más adelante señalaremos en los supuestos en que se han dado estas circunstancias, el propio INSS ha reconocido el derecho a la pensión de invalidez permanente. Así destacamos la importante jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya desde antiguo, ha venido señalando (STS 26 mayo 1972 (2898) que " si bien es normal que preceda al estado de incapacidad permanente otro, de tipo transitorio, hay realidades patológicas en que el estado de incapacidad permanente ha surgido de forma completa e irreversible, por lo que no es necesaria la previa y transitoria incapacidad y ello es así por la propia naturaleza de las cosas que impide pasar por un estado transitorio de incapacidad cuando la misma ha sido presentada en su total y compleja patología». De igual forma en SSTs (3 febrero 1.969, 2 febrero 1970 (RJ 1970, 588), mantuvieron que " no puede estar en la intención del legislador otro propósito que establecer con carácter general la necesidad de un tratamiento previo, sin que ello pueda significar cerrar los preceptos de la Seguridad Social a aquellos productores que, por necesidad, continuaron realizando su tarea laboral, hasta que, por la gravedad de su estado o súbita enfermedad quedaron patológicamente en una situación definitiva e irreversible», criterio este que es mantenido también en las SSTs (18 febrero 1.970 (RJ.1970, 695), 3 mayo 1971 (Rj. 1971, 1979), 10 febrero 1.969 (Rj. 1969, 595), 20 febrero 1973, 27 septiembre 1974 (Rj 1974, 3479), 23 diciembre 1977 (Rj. 1977, 5060), 11 junio 1980 (Rj 1980, 2546) y STCT 20 abril 1987. Más recientemente en SSTs (22 enero 1990 (Rj 1990, 187) y 26 marzo 1987 (Rj 1987, 1743), ha sido explícito al señalar que no es necesario pasar por la situación de incapacidad laboral transitoria, para calificar de irreversible las lesiones que puedan dar lugar a una invalidez permanente.

En el mismo sentido, se pronunció el extinto Tribunal Central de Trabajo, entre otras, Sentencia 1 de febrero de 1.977 (RTCT 1977, 471). En Tribunal Central de Trabajo estableció en estos casos que podría entenderse que la invalidez proviene y se deriva de una situación de incapacidad temporal anterior. Igualmente lo interpreta la doctrina más relevante del tema (Alvarez de la Rosa).

Asimismo, analizando la jurisprudencia de los distintos TSJ, destacamos las siguientes sentencias (SSTSJ Andalucía (Sevilla) de 16 de mayo 1994; STSJ Galicia de 31 de mayo 1994 (AS 1994, 2270), en las cuales, aún y cuando el solicitante de la invalidez permanente no provenía de la situación de ILT, la pensión de invalidez es reconocida, planteándose únicamente cual habrá de ser la fecha de los efectos económicos de la pensión de incapacidad permanente, en el caso de que el expediente administrativo se haya iniciado a solicitud del interesado sin previa ILT, y en cuyo caso, siempre será la fecha de la solicitud de la prestación, fecha a partir de la cual surta los efectos económicos dicha prestación de invalidez.

En definitiva de lo anteriormente expuesto, se infiere que tanto en la normativa anterior, como en la actual, la norma preveía que la situación de invalidez permanente se derivase de la situación de ILT o IT, no obstante, la propia Entidad Gestora ha venido reconociendo las prestaciones de invalidez a trabajadores que en situación de alta, y sin haber iniciado período previo de ILT o IT, la han solicitado. Es por ello, por lo que esta Sala entiende que lo establecido en el art. 134.4 del TRLGSS aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio no ha de ser interpretado de modo estricto, debiendo valorarse en todo caso la gravedad de las lesiones que afectan a los solicitantes de las pretensiones, provengan de una situación de IT o no, tal como se deriva la jurisprudencia anteriormente citada.

Finalmente, y sobre las anteriores argumentaciones debemos destacar la reciente Orden 18 enero 1996 (RCL 1996, 263 y 456) para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio (RCL 1995, 2446), sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social (normativa que no es aplicable al presente caso) pero que sirve para avalar una vez más, el criterio mantenido por esta Sala, en cuyo párrafo 2 "in fine" del art. 13 viene a reconocer que "en los supuestos en que la invalidez permanente no esté precedida de una incapacidad temporal... »..

Pero, además, quiere llamar la atención la Sala acerca del hecho de que la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 que se cita sólo tenía por objeto debatir la validez del alta médica, cuya baja previa se debió a un accidente con fractura de radio mano izquierda, por lo que la decisión era si tal lesión estaba o no curada, sin que pueda valorarse otras lesiones ya que no se trataba de un pleito sobre invalidez permanente, sino sobre impugnación del alta médica.

Ello, pues, obliga a rechazar el submotivo alegado, pues hubo una situación de Incapacidad Transitoria, y con base en ella la incoación de un expediente de invalidez ,permanente con su correspondiente resolución que es el objeto del presente recurso.

Por lo que respecta a la segunda argumentación, igualmente ha de rechazarse, pues, como ya se expuso, la Juzgadora de instancia, una vez practicada las pruebas, hizo su valoración y optó por la pericial médica; y aunque la Sala comparte la opinión de la parte recurrente acerca de la seriedad de la pericial médico-forense también considera igualmente seria y válida la pericial de parte que efectúa el perito, respetando, porque no puede ser de otra manera, la decisión del Juez acerca de la valoración de la prueba.

Por último, y en cuanto a la tercera argumentación, ya ha señalado de forma reiterada esta Sala, que es doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia de 25.6.98 Ar. 5704), que se pueden valorar en el juicio las lesiones que existían en el momento en que se tramitó el expediente.

El informe pericial no consigna lesiones médicas, sino que valora las que existen que ya obran en el expediente. Es cierto que ni la **fibromialgia**, ni la patología lumbar aparecen en el informe de la UVMI, pero obra en el expediente un informe de Atención Primaria de 8.5.96, donde se habla de artrosis generalizada, y el informe forense tan reiteradamente citado por la recurrente, se consignan padecimientos a nivel cervical, lumbar y de las rodillas, y se habla de movilidad dolorosa.

No existen, pues, ni nuevas lesiones, ni padecimientos no alegados en vía administrativa, lo que hace decaer la argumentación citada, y, por ende el recurso, y obliga a confirmar la sentencia, al permanecer inalterado el relato fáctico, y presentar la actora lesiones que le incapacitan, como expuso la Juez de instancia para el desempeño de su profesión habitual.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinentes aplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de fecha 11.11.98, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 6 de esta Provincia y en consecuencia, confirmamos la misma.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BBV cta número: 3537/000066 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 50.000 pts en la entidad de crédito B.B.V. c/c 2410000066 N° proc y año, clave 4043, Oficina Génova n° 17 de Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo. Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.